

## **ESTOMATOLOGÍA, UN PACIENTE CRÓNICO**

**La culpabilidad de Goiriena y Barranquero deja en evidencia las irregularidades en la facultad**

**El Rectorado intervino Estomatología para garantizar la docencia a los alumnos**

**El polémico departamento de la UPV vive un grave conflicto desde hace décadas**

Marta Fernández Vallejo, El Correo, 14/10/2012

BILBAO. Un jurado popular declaraba el pasado martes culpables a los catedráticos de Medicina de la UPV Javier Goiriena y Montserrat Barranquero de los delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos; es decir, de quedarse con el dinero de la Universidad para enriquecerse. A falta de la sentencia —el fiscal pide diez años de cárcel para cada uno—, este juicio es solo la punta del iceberg de las irregularidades y conflictos que envuelven desde hace lustros al Departamento de Estomatología, al que pertenecen los imputados. La Universidad vasca acaba de intervenirle, como ya ha hecho en otras dos ocasiones en doce años, porque el área era ingobernable y el conflicto afectaba a la docencia de los alumnos.

Hay episodios antiguos, y turbios, como la venta de títulos falsos de Odontología o el funcionamiento ilegal de la clínica de la facultad en la década de los 90. Otros son más recientes, como la denuncia por la asignación de cientos de horas de prácticas clínicas a profesores que no las impartían o el propio juicio contra el exdecano Goiriena y la exdirectora Barranquero por apropiarse de dinero de másteres y convenios, aunque las irregularidades venían de hace más de una década. Durante este tiempo se han sucedido graves enfrentamientos entre profesores, denuncias por acoso laboral, y más de una docena de juicios y cientos de recursos administrativos y escritos de queja ante el Rectorado.

En Estomatología trabajan 77 profesores. Hay dos grupos enfrentados. Uno, el mayoritario, compuesto por cerca de cuarenta docentes, en el que figuran los imputados Goiriena y Barranquero y algunos de los profesores que declararon a su favor en el juicio. Este sector tiene el poder en el departamento: se encarga de su gestión económica y docente. El otro, minoritario —con no más de 15 profesores—, no ha tenido responsabilidad en la gestión del área en los últimos quince años y es el que ha sacado a la luz las irregularidades registradas. Su arma es denunciar y recurrir todas cada una de las decisiones de la dirección que consideran ilegales e injustas. Se han personado en el juicio como acusación particular —la agrupación Garbi eta Zuri— contra sus jefes.

No es un conflicto banal. Hay escenas difíciles de creer entre catedráticos: se ha tenido que recurrir a tirar la puerta de un despacho con una palanqueta porque el departamento no quería entregar las llaves al Decanato; un profesor ha permanecido varios meses de baja psiquiátrica por las secuelas del mobbing de sus compañeros, y hay expedientes y juicios por

amenazas, insultos y agresiones físicas. Si se pregunta a los denunciantes, aseguran estar relegados y sufrir acoso laboral por haber sacado a la luz las irregularidades. El otro sector acusa a sus rivales de actuar por enemistad –porque no se han visto cumplidas sus aspiraciones– y de paralizar con sus continuos recursos el funcionamiento del departamento.

## El negocio de los másteres

El anómalo funcionamiento de esta área universitaria y la falta de control de la UPV sobre su gestión ha sido el caldo de cultivo del conflicto. En los años 90, el Departamento de Estomatología descubrió un filón: había una gran demanda entre los licenciados de Medicina de títulos de postgrado para especializarse. En aquella época, másteres y doctorados no eran enseñanza reglada, por lo que los profesores cobraban su trabajo en esos cursos como un extra. El proceso era sencillo: los docentes proponían impartir un título y la UPV les daba el visto bueno. Los responsables del programa gestionaban el dinero de las matrículas (los alumnos pagaban entre medio millón de pesetas y un millón): contrataban a los docentes para los másteres, compraban el material y organizaban las clases, que se impartían los fines de semana.

El Tribunal de Cuentas del País Vasco denunció durante años las numerosas irregularidades que se cometían en los postgrados –contrataciones ‘a dedo’ y compra de material sin concursos públicos– y la falta de control de la institución académica sobre el dinero que se manejaba en esos cursos.

Con Goiriena de decano de Medicina y Barranquero de directora de departamento, Estomatología organizó decenas de másteres de todo tipo: desde Medicina Tradicional China hasta Homeopatía o Salud Laboral, aunque no tuvieran nada que ver con su especialidad. Docentes cercanos a la dirección se beneficiaron de ese negocio durante años. «No habría que dejar a los profesores que manejen el dinero de la Universidad confiando en su responsabilidad. De ahí surgen muchos conflictos e irregularidades», confiesan expertos económicos de la UPV.

El antiguo sistema de nombramiento de cátedras también provocó enemistades. Goiriena presidió el tribunal en el que logró una cátedra Montserrat Barranquero, entonces su socia en empresas y, al parecer, compañera sentimental, cuando otros profesores habían suspendido hasta en seis ocasiones. Este procedimiento –que ya ha sido modificado– permitía favorecer a algunos aspirantes al margen de sus méritos. El último escándalo de Estomatología ha sido la denuncia de los integrantes del grupo Garbi eta Zuri en la que se acusa a la dirección del departamento de asignar a docentes clases prácticas que no se impartían. La directora y la secretaria académica han cogido la baja y el Rectorado se ha visto obligado a intervenir su gestión.

Es la tercera intervención del Rectorado al Estomatología. La primera de ellas se produjo cuando la denuncia por malversación de fondos llegó a la Fiscalía en el año 2000. El Adezle –defensor universitario– ha aconsejado que el departamento se divida en dos, una posibilidad que estudia ahora el Rectorado, para evitar males mayores. La comunidad universitaria no entiende que después de quince años los responsables de la UPV no hayan puesto fin a este conflicto y no se hayan sancionado las irregularidades detectadas. Sindicatos y grupos de profesores ya han reclamado al rector que depure responsabilidades.